



**JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
TJA-1024/2021-JM

**ACTOR**  
MAURA ELIZ COVARRUBI APOLINAR.

**AUTORIDADES DEMANDADAS**  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
VILLA DE ÁLVAREZ, PRESIDENTE Y  
TESORERO DE ESE MISMO  
AYUNTAMIENTO

**MAGISTRADO PONENTE**  
JUAN MANUEL FIGUEROA LÓPEZ

**SENTENCIA DEFINITIVA**

Colima, Colima, **diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.**

**VISTO** para resolver en definitiva el juicio contencioso administrativo radicado bajo número **TJA-1024/2021-JM** encontrándose debidamente integrado el expediente para su resolución, y

1

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. Presentación de la demanda**

Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la C. **Maura Eliz Covarrubi Apolinar**, demandó al Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, así como al Presidente y al Tesorero, ambos de ese mismo Ayuntamiento, e impugnó el cobro y correspondiente pago y devolución del derecho de alumbrado público.

**SEGUNDO. Admisión de la demanda**

Mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la referida demanda, teniendo a **Maura Eliz Covarrubi Apolinar**, demandando al Ayuntamiento Constitucional de Villa

de Álvarez, así como al Presidente y al Tesorero, ambos de ese mismo Ayuntamiento, la nulidad del cobro y correspondiente pago y devolución del derecho de alumbrado público, así como solicitando la suspensión del acto reclamado.

### **TERCERO. Admisión de pruebas ofrecidas por el actor**

En el auto de radicación mencionado y de conformidad a los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, se tuvieron por admitidas a la parte actora las siguientes pruebas: **DOCUMENTALES.** Consistentes en original de aviso-recibo de energía eléctrica correspondiente al periodo de catorce de junio a trece de agosto de dos mil veintiuno; comprobante de pago de energía eléctrica de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintiuno. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.** Pruebas que se desahogan por su propia naturaleza.

Por otra parte, en dicho auto se ordenó correr traslado de la demanda a las autoridades demandadas para que dentro del término legal concedido manifestaran lo que a su derecho conviniera.

2

De igual manera, se concedió a la parte actora la suspensión del acto impugnado para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se pronuncia sentencia definitiva en el juicio en que se actúa.

### **CUARTO. Contestación de las autoridades demandadas**

Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades demandadas dando contestación a la demanda e informando el cumplimiento a la suspensión concedida a la parte actora.

### **QUINTO. Admisión de pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas**



En el acuerdo de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Justicia Administrativa, a las autoridades demandadas se les tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: **DOCUMENTAL** consistente en el aviso-recibo correspondiente al número de servicio **PRESUNCIONAL, LEGAL Y HUMANA. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Pruebas que se desahogan por su propia naturaleza.

#### **SEXTO. Alegatos**

En el auto de antecedentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de la materia, se le concedió el término legal a las partes a fin de que formularan sus alegatos por escrito; en el entendido que, una vez fenecido el plazo, se turnaría el expediente en que se actúa para el dictado de la sentencia definitiva.

#### **SÉPTIMO. Turno del expediente para el dictado de la sentencia**

3

Las autoridades demandadas presentaron sus correspondientes alegatos recibidos por este tribunal el día diez de noviembre de dos mil veintiuno, sin embargo, no hubo presentación de alegatos por la parte actora, en consecuencia, fueron turnados los autos del presente juicio contencioso administrativo para el dictado de la sentencia definitiva.

### **C O N S I D E R A N D O**

#### **PRIMERO. Competencia**

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante **Tribunal de Justicia Administrativa**), es en términos de lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción IV y 12 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 22 y 77 de la Constitución Política del



Estado Libre y Soberano de Colima; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 38 y 39 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante **Ley de Justicia Administrativa**) y 1, 2 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima (en adelante **Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa**), un órgano constitucional local autónomo a cargo de la función jurisdiccional especializada en materia administrativa, incluyendo la fiscal y de responsabilidades de servidores públicos, con competencia para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública del Estado y los municipios.

Asimismo, es el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos del Estado y los municipios por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias por los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, o al patrimonio de los entes públicos, del Estado y los municipios.

4

---

Por tanto, el Tribunal es competente para conocer y resolver el presente juicio contencioso administrativo al encontrarse dotado de plena autonomía y jurisdicción para dictar y ejecutar sus sentencias, de conformidad a lo señalado por los artículos 117 de la Ley de Justicia Administrativa y 66 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa.

## **SEGUNDO. Legitimación procesal**

Con fundamento en los artículos 47 párrafo 1, fracciones I y II, inciso a) y 51 de la Ley de Justicia Administrativa, y derivado del examen de las constancias que obran en el presente expediente, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimación procesal de las partes.



### **TERCERO. Precisión de los actos impugnados**

Al realizar el análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron junto a aquélla, se obtiene que esencialmente se impugna el siguiente acto administrativo:

#### **I. EL cobro y correspondiente pago y devolución del Derecho de Alumbrado Público relativo al número de servicio**

Robustece lo anterior, el siguiente criterio orientador:

*“Época: Décima Época. Registro: 2014827. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV. Materia(s): Administrativa. Tesis: VII.1o.A.19 A (10a.). Página: 2830.*

#### **DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ. SU ESTUDIO DEBE SER INTEGRAL.**

*Del artículo 325 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, se colige que las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial local deben resolver la pretensión efectivamente planteada en la demanda de nulidad, previa fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, y suplir la deficiencia de la queja en los casos previstos por dicha norma; de ahí que ese escrito inicial constituye un todo y su análisis no debe circunscribirse al apartado de los conceptos de impugnación, sino a cualquier parte de éste donde se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, como lo ordena el propio precepto 325 en su fracción IV, al disponer que las sentencias del órgano jurisdiccional referido contendrán el "análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados.", lo cual implica que el estudio de la demanda en el juicio contencioso administrativo debe ser integral y no en razón de uno de sus componentes.”*

### **CUARTO. Análisis de las pruebas**

Atendiendo lo dispuesto por los artículos 111 y 117, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, se procede a valorar las pruebas previamente desahogadas en el juicio, de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

## I. Pruebas de la parte actora

En términos de lo dispuesto en el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Colima (en adelante **Código supletorio de la ley de la materia**), supletorio de la Ley de Justicia Administrativa,<sup>1</sup> se otorga **pleno valor probatorio** a las **documentales privadas** consistentes en aviso-recibo de energía eléctrica correspondiente al periodo de catorce de junio al catorce de agosto de dos mil veintiuno; comprobante de pago de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintiuno.

Se concede pleno valor probatorio a la **instrumental de actuaciones**, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 412 del Código supletorio de la ley de la materia.

Asimismo, en lo que respecta a la prueba **presuncional en su aspecto legal** de conformidad con el artículo del artículo 420 del Código supletorio de la ley de la materia, adminiculada con el resto del caudal probatorio, se le reconoce pleno valor probatorio; mientras que la **presuncional en su aspecto humano** en términos del artículo 422 del Código supletorio referido, se le otorga valor indiciario.

6

## II. Pruebas de la parte demandada

Se concede pleno valor probatorio a la **instrumental de actuaciones**, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 412 del Código supletorio de la ley de la materia.

---

<sup>1</sup> Cfr. El artículo 38 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, el cual señala que los juicios que se promuevan ante el Tribunal, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala dicha ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a los que prescribe ese ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el **Código de Procedimientos Civiles para el Estado**.

Asimismo, en lo que respecta a la prueba presuncional en su aspecto legal de conformidad con el artículo del artículo 420 del Código supletorio de la ley de la materia, adminiculada con el resto del caudal probatorio, se le reconoce pleno valor probatorio; mientras que la presuncional en su aspecto humano en términos del artículo 422 del Código supletorio referido, se le otorga valor indiciario.

#### QUINTO. Causal de improcedencia

En términos de lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley de Justicia Administrativa, se procede en primer término al análisis de las causas de improcedencia y de sobreseimiento que pudieran advertirse de las manifestaciones de las partes o que operen de oficio en términos de la ley de la materia, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Del análisis integral del escrito de contestación de las autoridades demandadas se obtiene que éstas hicieron valer causales de improcedencia de la demanda con relación a los artículos 86, fracción II y 85, fracción V, donde se establecen como tales las siguientes hipótesis:

*“V. Contra actos que no afecten los intereses del actor, que se hayan consumado de un modo irreparable o hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos últimos, aquellos contra los que no se promovió el juicio dentro de los plazos señalados por la presente Ley;”*

Sin embargo, este Tribunal considera que en la especie la parte actora sí acredita que el acto impugnado le genera un perjuicio, al aportar elementos de convicción suficientes para considerar que efectivamente pagó el derecho de alumbrado público en las condiciones que establece en el escrito de demanda, situación que es precisamente la que considera le genera un perjuicio, ello con independencia de que la procedencia de la acción será materia de estudio de fondo del asunto. Tampoco se acredita

que los actos se hubieran consumado de un modo irreparable ni que hubieran sido consentidos expresa o tácitamente, supuesto que resulta incuestionable el ejercicio de la acción de parte de la actora para determinar su inconformidad con los mismos, además de que la demanda fue presentada dentro del término legal, según se advierte de las fechas de conocimiento de los actos y presentación del referido escrito inicial, luego entonces, no se considera que en el caso confluya alguna de las figuras determinadas en la fracción que se analiza.

Por otra parte, este Tribunal no advierte que en el caso se actualice ninguna diversa causal de improcedencia ni de sobreseimiento de la demanda, motivo por el cual procede el análisis del fondo del asunto.

#### **SEXTO. Agravios y manifestaciones de las partes**

Partiendo del principio de economía procesal y sobre todo porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la sentencia, se estima que en la especie resulta innecesario transcribir los hechos y agravios esgrimidos por la parte actora, toda vez que obran en el expediente del presente juicio y se tienen a la vista para su debido análisis, por lo que como se ha señalado, resulta innecesaria además de impráctica su transcripción.

8

Robustecen lo anterior, *mutatis mutandis*, los siguientes criterios jurisprudenciales:

*“Época: Novena Época. Registro: 166521. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Febrero de 2008, Tomo XXVII. Materia(s): Común. Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/30 Página: 2789.*

#### **AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN.**

*La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos*

*que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes legitimadas se les corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirlos.*

*Época: Novena Época. Registro: 166520. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Septiembre de 2009, Tomo XXX. Materia(s): Administrativa. Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/28 Página: 2797.*

**AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL.**

*La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias que emitan al resolver los recursos de revisión fiscal los agravios hechos valer por el recurrente, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, pues en términos del artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, los mencionados recursos están sujetos a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución fija para la revisión en amparo indirecto; de modo que si el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación, la falta de transcripción de los aludidos motivos de inconformidad no deja en estado de indefensión a quien recurre, puesto que son precisamente de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, amén de que para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos en los que se sustenta la sentencia recurrida conforme a los preceptos legales aplicables, pero siempre con relación a los agravios expresados para combatirla.”*

**SÉPTIMO. Estudio de fondo**

La parte actora en su escrito de demanda reclama el cobro y correspondiente pago y devolución del Alumbrado Público relativo al número de servicic \_\_\_\_\_ aduciendo esencialmente a manera de agravios que “...los actos impugnados violan las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, 73 fracción XXIX, inciso 5º, subinciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículos 37, fracción IV, del

*Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido Jurisprudencia Temática Tesis: P./J. 6/88, Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Página: 134; que establece; “QUE SON INCONSTITUCIONALES LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN”. No obstante que el aludido recibo de energía eléctrica expedido por la Comisión Federal de Electricidad no establece fundamento legal alguno que sirva de referencia para justificar el cobro del Derecho de Alumbrado Público por parte de las autoridades demandadas, se tiene conocimiento por información verbal vertida por la propia Comisión Federal de Electricidad y la Tesorería del Ayuntamiento de VILLA DE ÁLVAREZ, Colima, que dicho cobro se realiza conforme lo establece la Ley de Hacienda para del Municipio de Villa de Álvarez y la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez.”*

Las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda señala en relación de los agravios de la parte actora que, “...se manifiesta que la existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que la Comisión Federal de Electricidad hubiera realizado la detención que le imponen los preceptos reclamados, por sí sola no conduce a tener por cierto los actos de aplicación y ejecución que en la demanda se atribuyeron a dicha autoridad ejecutora, dado que no fue esta quien la realizó, sino un particular obligado por las normas tributarias.”

Ahora bien, bajo el paradigma de los derechos humanos y considerando el acceso a la justicia y la justicia plena se procede a realizar un estudio del acto impugnado para determinar si la autoridad demandada ajustó su actuación a derecho.

En esta especie, es necesario considerar el contenido de la Jurisprudencia que se reproduce a continuación:

Época: Séptima Época. Registro: 232014. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Primera Parte. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: Página: 11.*

**ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION.**

*De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República.*

La aplicación de la anterior Jurisprudencia resulta de carácter obligatorio para este Tribunal de conformidad con el siguiente criterio jurisprudencial:

Época: Novena Época. Registro: 187496. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.P. J/26. Página: 1225.*

**JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD.**

*Conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo: "La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decreta en Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. ..."; y esa obligatoriedad persiste hasta en tanto no exista otra tesis jurisprudencial con distinto criterio.*

Así las cosas, y tomando en cuenta lo antes narrado, es claro que el derecho de alumbrado público conocido como DAP, es inconstitucional cuando en los códigos y leyes locales se prevé que el derechos por el servicio de alumbrado público se calcule tomando como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, siendo que en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho. En este orden de ideas, ciertamente, la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, establece la base de dicho tributo en relación con los rangos del consumo y venta de energía eléctrica y del análisis de las documentales aportadas por la parte actora se llega a la conclusión de que con dicho criterio se recaudó la citada contribución en el caso que nos ocupa, razón por la cual debe concluirse que se trata de una contribución establecida por la legislatura local al consumo de fluido eléctrico, con lo cual se invade la esfera de facultades exclusivas de la Federación; por ende, es un punto indubitable que el cobro por parte de la autoridad demandada a través de la Comisión Federal de Electricidad del derecho de alumbrado público es ilegal en la forma en que se viene determinando en el caso que se analiza, sin que ello signifique declaración de inconstitucionalidad pues lo ponderado en esta sentencia atiende a cuestiones de legalidad.

En consecuencia, a efecto de salvaguardar el derecho de tutela judicial del accionante, la cual supone el acceso a la jurisdicción y obtención de una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, es procedente declarar la nulidad del concepto de pago



por derecho de alumbrado público a que se refiere el aviso - recibo referente al servicio con número

La autoridad demandada deberá realizar los trámites necesarios para que se entregue notificación escrita a la Comisión Federal de Electricidad y se realicen las gestiones necesarias para que en lo sucesivo -una vez que cause ejecutoria esta sentencia- deje de aplicar el derecho de alumbrado público respecto del citado servicio en los términos previstos por los artículos mencionados en la demanda, es decir, que para su determinación se tome en cuenta el consumo de energía eléctrica.

Por último, respecto a la devolución de la cantidad cobrada por concepto de aplicación del derecho de alumbrado público solicitada por la parte actora, relativa al importe de \$450.15 cuatrocientos cincuenta pesos y quince centavos por dicho concepto, referida en el mencionado estado de cuenta, a ese respecto debe decirse que este Tribunal estima que habiéndose llegado a la consideración de que el Derecho de Alumbrado Público, calculado en la forma en que lo establece la normatividad local resulta inconstitucional, este órgano jurisdiccional considera ilegal la recaudación de la suma anotada en el presente párrafo y por ello resulta conducente ordenar la devolución de la cantidad antes mencionada, que se contiene en el aviso recibo aportado como prueba por la actora. Lo anterior encuentra sustento en los términos de la propia demanda que motivó la tramitación de este juicio, ya que la parte actora establece en el capítulo de acto o resolución impugnado, que éste consiste en el cobro y correspondiente pago y devolución del derecho de alumbrado público (DAP), contenido en el correspondiente recibo de energía eléctrica, emitido por la Comisión Federal de Electricidad.

No pasa desapercibido para este Tribunal que es obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público, esto es, cubrir aquellas contribuciones que en consideración al sujeto y de sus bienes, de manera proporcional y equitativa se encuentren frente al orden jurídico aplicable en materia de impuestos y derechos; sin embargo, en el caso que nos

ocupa, el derecho de alumbrado público que se determina conforme a las disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Villa de Álvarez, Colima y se recauda por las autoridades demandadas deviene ilegal, por lo que es imperante para este Tribunal que atendiendo a las deficiencias encontradas para la determinación de la contribución de referencia, pues no se atiende la debida legalidad que para el caso debe imperar, debe de pronunciarse la nulidad lisa y llana, ya que de lo contrario sería una violación y denegación de justicia o más aún pretender que el ciudadano contribuya al gasto público mediante el pago de un derecho municipal que en reiteradas ocasiones ha sido declarado inconstitucional por instancias del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 118 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima y 66 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, es de resolverse y

#### SE RESUELVE:

14

---

**PRIMERO.** Se declara la nulidad del concepto de pago denominado "*derecho de alumbrado público*", a que se refiere el aviso - recibo que fuera acompañado al escrito inicial de demanda.

**SEGUNDO.** Las autoridades demandadas deberán realizar los trámites necesarios a fin de que se entregue notificación escrita a la Comisión Federal de Electricidad para que a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, **deje de aplicar el derecho de alumbrado público** respecto del aviso- recibo referente al servicio número en los términos consignados en la parte considerativa de esta sentencia.

**TERCERO.** Las autoridades demandadas **deberán devolver** a la parte actora la cantidad de \$450.15 cuatrocientos cincuenta pesos y quince centavos, ello como consecuencia de la declaratoria de nulidad.



**CUARTO.** Se vincula a las autoridades demandadas al inmediato y diligente cumplimiento de esta resolución, apercibidas que de no hacerlo se podrán hacer acreedoras a los medios de apremio y, en su caso, a las sanciones previstas en la ley.<sup>2</sup>

**Notifíquese** como en derecho proceda.

Así, lo resolvieron por unanimidad y firman la Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**MAGISTRADO PRESIDENTE**

**ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA**

**MAGISTRADA**

**YARAZHET CANDELARIA  
VILLALPANDO VALDEZ**

**MAGISTRADO**

**JUAN MANUEL FIGUEROA LÓPEZ**

**SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**

**ERIKA ZUGHEY PEÑA LLERENAS**

La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, recaída dentro del expediente contencioso administrativo identificado bajo la clave TJA-1024/2021-JM (impugnación de derecho de alumbrado público).

<sup>2</sup> De conformidad a lo dispuesto en el artículo 66, párrafo 2, fracción XIII, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa.



Notificada a la parte actora de la sentencia definitiva que antecede,  
el día

Notificada a las autoridades demandadas de la sentencia definitiva  
que antecede, mediante oficios con números